

# RECIENTES ORIENTACIONES ACERCA DE LA POSICIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LA SALVAGUARDIA DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS: NUEVAS MEDIDAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN LAS RÍAS GALLEGAS

**Bernardo Sánchez Pavón**

Instituto Gallego de Estudios del Transporte y las Infraestructuras.

## 1. INTRODUCCIÓN.

Puede decirse, sin temor a equivocaciones, que las rías gallegas han adquirido una especial trascendencia para el futuro de esta Comunidad Autónoma. Ello no sólo porque en las mismas se encuentre una singular riqueza fáunica, botánica y paisajística sino por el importante potencial económico que representan para una Comunidad que pretende hacer del turismo un factor clave en su desarrollo endógeno. Así, el mantenimiento impoluto de sus rías se constituye en un factor esencial desde el punto de vista crematístico y acrisolar este recurso adquiere el carácter de auténtico imperativo para los poderes públicos en su permanente búsqueda de la satisfacción del interés general.

Desde el punto de vista económico, las rías de Galicia son unos recursos que, complementados con una adecuada oferta de servicios<sup>1</sup>, se muestran como importantes inductores de corrientes turísticas. En el *PLAN INTEGRAL DE CALIDAD DEL TURISMO ESPAÑOL 2000-2006 (PICHTE)*<sup>2</sup> se plantea la *calidad como principio fundamental*. Se establece en este Plan que el sector turístico español tiene que basar su estrategia de futuro en la calidad que pasa de ser una preocupación esencialmente empresarial, apoyada por las Administraciones General y Autonómicas, a constituirse en el referente global del sector, abarcando la noción de calidad no sólo al sector y la actividad privada, sino también a los destinos y a la aplicación de criterios de *sostenibilidad medioambiental*. Los cambios constantes de la demanda turística y la evolución de sus gustos hacia exigencias cada vez mayores de calidad, junto con la aparición de destinos competidores con condiciones sociolaborales más ventajosas, con los que el turismo español ni puede ni debe competir en precio, hace necesario el impulso del concepto de la «calidad turística española» como factor diferenciador de la

<sup>1</sup> Sobre los conceptos de "recursos turísticos" y "oferta turística" vide Figuerola, M., *Teoría económica del turismo*, Ed. Alianza, 1985.

<sup>2</sup> El PICHTE contiene el Plan Estratégico de la Política Turística Española para los años 2000-2006. Fue elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYME, tras recibir el visto bueno de la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en Madrid en octubre de 1999, y posteriormente aprobado por el Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 1999. Este Plan se concreta en diez programas o líneas de ejecución y pretende sintonizar los esfuerzos del sector privado y las distintas Administraciones Públicas en la consecución del objetivo primordial que es la Calidad turística. Como antecedente más inmediato se encuentra el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español I (1992-1995) y II (1996-1999), conocido como Plan FUTURES.

oferta en los mercados internacionales, así como la *incorporación de criterios de sostenibilidad medioambiental en los destinos turísticos españoles para mantener en el largo plazo las cuotas de mercado*.

Es una realidad innegable, empero, el progresivo asentamiento de centros urbanos y actividades industriales de cierta entidad en las proximidades de estas zonas. Recientes estudios estadísticos muestran un continuado crecimiento del número de edificios censados en Galicia, correspondiendo a las provincias de A Coruña y Pontevedra no sólo un número mayor de viviendas en términos absolutos sino, además, la más importante evolución. Por otra parte, se aprecia una tendencia de la población gallega a desplazarse desde las zonas del interior hacia la franja costera puesto que es precisamente en estas zonas donde se encuentra el auténtico foco de desarrollo económico en la Comunidad. El transcurso de los años ha demostrado como estas circunstancias pueden derivar en la producción de severos daños a la calidad de las aguas de las rías gallegas, bien sea por efectos puntuales o bien de carácter acumulativo, haciéndose necesario utilizar todos los instrumentos en manos de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma para corregir y prevenir estas indeseables consecuencias. Los hechos han obligado, pues, a acometer la labor de creación de una normativa específica para los vertidos contaminantes en las rías de Galicia que, respetando lo dispuesto en el Derecho Comunitario y el básico del Estado, estableciese unos estrictos regímenes de vertidos y protección de los márgenes de aquellas.

En este enmarañado contexto surge la *Ley 8/2001, de 2 de agosto, de Protección de la Calidad de las Aguas de las Rías de Galicia y de Ordenación del Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales Urbanas*, con la pretensión de garantizar la calidad de las aguas de las rías de Galicia mediante el establecimiento de objetivos de calidad y de límites para la emisión de vertidos, así como la ordenación de las actividades que pudiesen resultar incompatibles con dicha protección, cuya instalación requerirá una especial atención a las exigencias ambientales. Objetivo último del legislador es que Galicia se dote de una norma propia y del máximo rango en la jerarquía de las fuentes del derecho autonómico que haga razonablemente compatibles el desarrollo urbano e industrial con el marisqueo, turismo y baño en las rías.

A la hora de abordar el análisis de la referida normativa se hace preciso puntualizar el significado de tres importantes conceptos:

*Aguas residuales urbanas:* Son las aguas residuales domésticas o la mezcla de éstas con aguas residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial.

*Aguas residuales domésticas:* Son aquellas aguas residuales procedentes de zonas de vivienda y de servicios, generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas.

*Aguas residuales industriales:* Son todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas residuales domésticas ni aguas de escorrentía pluvial.

## 2. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

La adecuada protección de la calidad de las aguas requiere que los vertidos de las aguas residuales urbanas se sometan, antes de su evacuación, a una serie de tratamientos en instalaciones adecuadas, para limitar sus efectos contaminantes<sup>3</sup>.

La Unión Europea aprobó la *Directiva 91/271/CEE*, del Consejo, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en la cual se establece que los Estados miembros deberían adoptar las medidas necesarias para garantizar que dichas aguas sean tratadas correctamente antes de su vertido. Para ello, la norma comunitaria impone la obligación de someter dichas aguas residuales a tratamientos<sup>4</sup> en diferentes plazos. Los criterios que utiliza la Directiva para fijar estas obligaciones son el número de *habitantes-equivalentes*, concepto definido en función de la carga contaminante tanto de personas, como de animales e industrias y las *aglomeraciones urbanas*, que son las zonas que presentan una concentración suficiente para la recogida y conducción de las aguas residuales; asimismo, también se toma en consideración la mayor o menor sensibilidad de la zona en la que van a realizarse los vertidos.

Con carácter general, la Directiva establece dos obligaciones claramente diferenciadas: En primer lugar, las *aglomeraciones urbanas* deberán disponer, según los casos, de sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales y, en segundo lugar, se prevén distintos tratamientos a los que deberán someterse dichas aguas antes de su vertido a las aguas continentales o marítimas.

Para procurar la transposición al Ordenamiento interno de la Directiva 91/271/CEE se dictó el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas<sup>5</sup>. De acuerdo con la finalidad de protección del medio ambiente que constituye el objeto de tal disposición, esta constituye legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.23. de la Constitución, correspondiendo su ejecución a las Comunidades Autónomas, en virtud de las competencias estatutarias atribuidas a éstas, en el marco del artículo 148.1.9. de la Constitución. Ahora bien, junto a este marco competencial general, la disposición tiene en cuenta la incidencia de otras habilitaciones constitucionales; así se menciona el título competencial recogido en el artículo 149.1.18. de la Constitución, lo que obedece a la modificación que esta norma introduce en los criterios establecidos en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, al cambiar el criterio de número de habitantes por el número de *habitantes-equivalentes* y deferir a las Comunidades Autónomas la delimitación de las aglomeraciones urbanas, con las consecuencias que tal delimitación tiene en el cumplimiento de las obligaciones

<sup>3</sup> Debe destacarse el distinto régimen jurídico que siguen los distintos residuos. Así la ley 10/1998, de 21 de abril de residuos en su artículo 2.1 c) excluye de su ámbito de aplicación los vertidos desde tierra al mar que quedan sujetos a la Ley 22/1988 de Costas, procede así hacer una diferenciación en el tratamiento jurídico de los residuos teniendo presente que aquellos que hayan de ser vertidos al mar seguirán un régimen normativo diferente.

<sup>4</sup> En la determinación de los tratamientos a que deberán ser sometidas las aguas residuales urbanas antes de su vertido, se tiene en cuenta si dichos vertidos se efectúan en *zonas sensibles* o *zonas menos sensibles*, lo cual determinará un tratamiento más o menos riguroso.

<sup>5</sup> En el procedimiento de elaboración de la presente disposición fueron consultadas las Comunidades Autónomas y la Comisión Nacional de Administración Local.

establecidas en el Real Decreto-Ley. Finalmente, conviene tener en cuenta que el Real Decreto-Ley 11/1995 procede también a complementar el régimen jurídico establecido en el Título III de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con el fin de proteger la calidad de las aguas marítimas de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas.

De un sucinto examen del Estatuto de Autonomía de Galicia puede evidenciarse la competencia exclusiva de la Xunta de Galicia en las siguientes materias:

Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda<sup>6</sup>.

Normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje en los términos del artículo 149. 1. 23<sup>7</sup>.

Ejecución de la legislación del Estado sobre vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral gallego<sup>8</sup>.

La potestad estatutaria de dictar normas adicionales en materia de ambiente, junto con la competencia que ostenta la Xunta de Galicia en relación con las obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general del Estado o cuya ejecución o explotación no afecte a otra Comunidad Autónoma (artículo 27.7 del Estatuto de Autonomía de Galicia), son elementos suficientes para fundamentar el contenido del título II de la Ley 8/2001.

Resulta, por tanto, notoria la competencia de la comunidad, pudiéndose concluir que la Ley 8/2001 encuentra, desde el punto de vista constitucional, fácil acomodo en las competencias propias de Galicia.

### **3. EL SERVICIO PÚBLICO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.**

La Ley 8/2001 a lo largo de su articulado regula la ordenación del servicio de depuración de aguas residuales urbanas. Este servicio ha presentado hasta la Ley 8/2001 un *carácter bifronte* reservándose la Administración Autonómica la ejecución de las estaciones depuradoras y asumiendo las Entidades Locales la explotación de las mismas. Sin embargo, el desarrollo del servicio público de saneamiento en Galicia y la implantación de numerosas instalaciones de depuración han puesto de manifiesto serias disfunciones, entre las que pueden destacarse las siguientes:

La falta de reglamentos u ordenanzas municipales que regulasen adecuadamente el citado servicio.

La gran disparidad de los costes económicos de explotación del servicio dependiendo de las situaciones en las que se encontraban los distintos municipios.

La falta de respuesta adecuada del sistema ante la producción de determinados vertidos de naturaleza industrial debida, principalmente, a la escasa capacidad técnica, económica o normativa de las Entidades Locales que venían prestando el servicio.

Estas disfunciones han alcanzado suficiente entidad para comprometer el cumplimiento de los objetivos ordenados por la normativa europea y de obligada asunción tanto por el ordenamiento jurídico español como por el gallego.

---

<sup>6</sup> Artículo 27.3 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de Autonomía de Galicia.

<sup>7</sup> Artículo 27.30 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de Autonomía de Galicia.

<sup>8</sup> Artículo 29.4 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de Autonomía de Galicia.

En vista de las circunstancias expuestas, la Ley 8/2001<sup>9</sup>, cuando ordena el servicio de depuración de aguas residuales urbanas en Galicia, opta por introducir cambios trascendentales en el mismo. La decisión más importante adoptada por el legislador gallego ha sido la de declarar este servicio público de *interés general de la Comunidad Autónoma*<sup>10</sup>, atribuyéndose la gestión del mismo a la Administración Hidráulica de Galicia, de acuerdo con las facultades establecidas en el artículo 4.1.c) de la Ley 8/1993.

El ámbito material del servicio comprende la regulación, la planificación, la aprobación definitiva de proyectos, la construcción y la gestión, explotación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales, redes de colectores generales y emisarios submarinos que formen parte de la programación de saneamiento y depuración de la Xunta de Galicia, así como, en su caso, la reutilización de las aguas residuales depuradas, quedando expresamente excluidas aquellas redes de alcantarillado cuyo proyecto, construcción y gestión corresponda a las Entidades Locales de forma exclusiva.

Con este cambio en la titularidad del servicio se pretende superar las mencionadas disfunciones anteriormente y, en particular, abrir un camino en la búsqueda de dos objetivos de la mayor importancia:

Lograr que por economías de escala el coste del servicio pueda reducirse sustancialmente.

Establecer un marco normativo que ordene adecuadamente la prestación del servicio en el ámbito autonómico.

La asunción del servicio de depuración de aguas residuales por parte de la Xunta de Galicia goza de una apoyatura normativa que convendría examinar. Tanto la legislación estatal de régimen local<sup>11</sup> como la autonómica, tras establecer que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, concretan que el Municipio ejercerá, en todo caso, las competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, con lo cual queda en manos de la Ley establecer el marco concreto de competencias municipales.

La doctrina del Tribunal Constitucional es clara a este respecto. Según la *STC 84/82* los entes Locales tienen autonomía constitucionalmente garantizada para gestión de sus intereses<sup>12</sup>, mas la determinación de cuáles sean esos intereses es obra de la Ley, que es la que les atribuye competencias concretas debiendo respetar en todo caso su

<sup>9</sup> Título II de la Ley 8/2001.

<sup>10</sup> Artículo 6 de la Ley 8/2001.

<sup>11</sup> Artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local y Artículo 80.2 de la Ley 5/1997, de Administración Local de Galicia.

<sup>12</sup> El Tribunal Constitucional también precisó en la *STC 4/181* que concretar el *interés* en relación a cada materia no es fácil y, en ocasiones, sólo puede llegarse a distribuir la competencia sobre la misma en función del interés predominante, pero sin que ello signifique un interés exclusivo que justifique una competencia exclusiva en el orden decisorio". Con otras palabras, no habrá en muchas ocasiones competencias exclusivas decisorias porque tampoco los intereses serán exclusivos, sino concurrentes o compartidos, más o menos prevalentes, según las circunstancias del caso concreto.

autonomía. Así pues, el régimen jurídico de las Corporaciones Locales es siempre resultado de la actividad concurrente del Estado y de las CCAA. Como puso de manifiesto la STC 4/81, de 2 de febrero, autonomía es "un concepto jurídico indeterminado que ofrece un margen de apreciación muy amplio" correspondiendo al legislador ordinario y al Tribunal Constitucional proceder a la interpretación de las normas constitucionales y a la individualización del concepto.

Por otra parte, no pueden olvidarse las obligaciones que tienen asumidas todas las Comunidades Autónomas derivadas de la normativa básica sobre saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, concretada en el Real Decreto-ley 11/1995 y en el correspondiente Plan Nacional de Saneamiento y Depuración.

Con todo, y si bien la Ley declara de interés de Galicia el servicio de depuración, no se deja de reconocer a las Administraciones Locales el ejercicio de determinadas competencias en relación con el mismo. Así se confirma en el artículo 7 de la Ley 8/2001, de 2 de agosto, al reconocer que las Entidades Locales ejercerán en materia de depuración de aguas residuales urbanas las competencias siguientes:

La promoción, redacción y propuesta a la Xunta de Galicia para su aprobación, previa comprobación de su adecuación a la programación autonómica, de planes y proyectos de obras e instalaciones.

La contratación y ejecución de las obras e instalaciones que les correspondan con arreglo a los planes y proyectos aprobados previamente, y aquellas otras que les encomiende la Xunta de Galicia.

La gestión y explotación de las obras e instalaciones, por si mismas o mediante cualquier fórmula asociativa con otras Entidades Locales.

La participación en la elaboración del Reglamento Autonómico Regulador del Servicio de Depuración, en los términos establecidos en la Ley.

#### **4. LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.**

Según el artículo 8 de la Ley 8/2001, de 2 de agosto, de Protección de la Calidad de las Aguas de las Rías de Galicia y de Ordenación del Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, el servicio de depuración de aguas residuales urbanas de la Comunidad Autónoma será gestionado por la Administración Hidráulica de Galicia, bien a través del Organismo Autónomo Aguas de Galicia o bien a través de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos. Estas Entidades a las que se hace referencia en la norma estudiada fueron creadas por la Ley 8/1993, de 23 de junio, Reguladora de la Administración Hidráulica de Galicia. En igualdad de condiciones técnicas y económicas, la Administración Hidráulica de Galicia podrá encomendar a las Entidades locales la prestación del servicio, tanto en la construcción como en la explotación de las instalaciones<sup>13</sup>.

El esquema básico de organización de la *Administración Hidráulica de Galicia* aparece diseñado en el artículo 2 de la Ley 8/1993, de 23 de junio, Reguladora de la Administración Hidráulica de Galicia, distinguiéndose entre:

Órganos administrativos generales:

---

<sup>13</sup> La Administración gestora de las instalaciones podrá utilizar al efecto cualesquiera de las formas actualmente vigentes para la gestión de servicios públicos.

El Consello de la Xunta de Galicia.

La Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas.

Entes especiales de la Administración hidráulica:

El Organismo autónomo Aguas de Galicia.

La Empresa pública de Obras y Servicios Hidráulicos.

Con respecto a la entidad *Aguas de Galicia*, cabe decir que se trata de un Organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito a la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas y dotado de plena autonomía para el cumplimiento de sus funciones contando con la participación de los usuarios en sus órganos colegiados.

Dentro de la competencia de la Administración autonómica, corresponde al ente autónomo Aguas de Galicia:

A. La elaboración, el seguimiento y la revisión de los planes hidrológicos.

B. La administración y el control del dominio público hidráulico.

C. La administración y el control de los aprovechamientos hidráulicos.

Ch. El proyecto, la construcción y la explotación de obras hidráulicas.

D. La autorización de las obras e instalaciones de vertidos desde tierra a las aguas del litoral gallego y el ejercicio de las funciones de policía sobre los mismos.

E. El ejercicio de cualquier otra función que le sea atribuida por el Consello de la Xunta de Galicia.

La *Empresa pública de Obras y Servicios Hidráulicos*, fue creada por la Disposición Adicional de la Ley 8/1993 y se configura como una Entidad de derecho público de la Xunta de Galicia, cuyo objeto es la gestión de aquellas obras y la prestación de aquellos servicios que por su cuantía o entidad le sean encomendadas, dentro del programa de actuaciones del Ente autónomo Aguas de Galicia. Dicha Entidad tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines. Su actividad se adecuará al ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las relaciones que resulten de su adscripción administrativa.

## 5. LA FINANCIACIÓN DEL SERVICIO.

El artículo 9 de la Ley 8/2001 establece que el servicio de depuración de aguas residuales urbanas de la Comunidad Autónoma será financiado íntegramente por la Administración hidráulica de Galicia, a través de los recursos siguientes:

El producto del *canon de saneamiento* creado por la Ley 8/1993.

Las transferencias que en su favor ordene la Xunta de Galicia y otras Entidades Públicas.

Préstamos y créditos, en los términos que determinen las leyes de presupuestos.

El producto de las sanciones que imponga por incumplimientos de la regulación del servicio.

Ingresos de derecho privado.

Cualesquiera otros recursos que pudiese obtener o serle asignados a este fin.

De entre todos estos recursos es indudable que aquél que debiera ocupar el papel primordial en la financiación del servicio es el denominado *canon de saneamiento*. Este canon fue creado por el artículo 33 de la Ley 8/1993 del Parlamento de Galicia. Se configura como un ingreso de derecho público, aplicable en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma estando su rendimiento destinado íntegramente a la financiación de gastos de inversión y de explotación de infraestructuras de evacuación *en alta* y de

tratamiento de aguas residuales, de acuerdo con la programación aprobada por el Consello de la Xunta de Galicia. El Ente autónomo Aguas de Galicia es el sujeto llamado por la Ley a realizar la gestión de dicho canon y a aplicarlo a las finalidades concretas a las que el mismo se destina, estando obligado a llevar un registro separado de los recursos obtenidos por este concepto, que podrá ser fiscalizado por la Consellería de Economía y Hacienda.

Constituye el hecho imponible de canon de saneamiento, según el artículo 34 de la Ley 8/1993, la producción de vertidos de aguas y de productos residuales, realizados directa o indirectamente. En todo caso, se entiende realizado el hecho imponible por el consumo o por la utilización potencial o real del agua de cualquier procedencia.

El canon se devengará en el momento de producirse el vertido o bien en el momento en que se produzca el uso o consumo de agua procedente de Entidades suministradoras o de captaciones propias, siendo sujetos pasivos del canon, en calidad de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza y demás Entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que efectúen vertidos o, en su caso, utilicen o consuman agua. Todas las Entidades públicas o privadas suministradoras de agua que desarrollen su actividad en el territorio de Galicia están obligadas a facturar y recaudar de sus abonados el canon de saneamiento. La base imponible del canon consiste, con carácter general, en el volumen de agua consumida o utilizada en el período que sea considerado; no obstante, en los casos en que la Administración, de oficio o a instancia del sujeto pasivo, opte por la determinación por medida directa o por estimación objetiva singular de la carga contaminante, la base consistirá en la contaminación efectivamente producida o estimada expresada en unidades de contaminación.

Desde 1996 del *canon de saneamiento* ha demostrado ser un instrumento eficaz para asegurar los necesarios recursos económicos para atender los fines encomendados, si bien las tarifas del tributo deberán actualizarse puesto que han permanecido sin variación desde su inicio. Se plantea, empero, un problema de compatibilidad del canon respecto de aquellos tributos y precios que las Administraciones Locales tuviesen en vigor para financiar el servicio de depuración de aguas residuales urbanas; es por ello por lo que la Ley 8/2001 también ordena, en buena lógica, la desaparición los actuales instrumentos financieros aplicados por las Entidades Locales. Así, el comienzo de la prestación efectiva del servicio por parte de la Administración Hidráulica de Galicia comportará el cese de la recaudación de los instrumentos tributarios y financieros que tuviesen vigentes la correspondiente Entidad o Entidades Locales a las que dé servicio la instalación de depuración de que se trate, sin perjuicio del derecho de éstas al cobro de los créditos pendientes.

## **6. EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE GALICIA 2001-2010.**

El *Plan Director de Infraestructuras de Galicia 2001-2010*, distingue entre Objetivos Generales, Objetivos Territoriales, Objetivos funcionales y Objetivos Instrumentales. Entre los *Objetivos Generales* están, en primer lugar, el de *contribuir a una mejora de la calidad de vida, tanto en asentamientos urbanos como rurales* y, en segundo lugar, la *utilización racional y eficaz de los recursos naturales*. Entre los *Objetivos Territoriales* destaca el de la *reducción de los impactos negativos de las actuaciones sobre el medio natural*.



En el PDI 2001-2010 se reconoce que la existencia de infraestructuras antiguas e inadecuadas de saneamiento y abastecimiento, unida a la necesidad de satisfacer una creciente demanda de agua y al retraso en la adopción de sistemas de depuración de aguas residuales que sufrió Galicia hasta la década de los 90, eran aspectos que estaban acelerando la progresiva degradación de nuestros recursos hidráulicos. Así pues, se propone una nueva política del agua basada en dos principios: *Gestión sostenible del agua desde un enfoque socioeconómico y utilización eficiente de los recursos*.

Sobre la base de estos principios ya se han ido estableciendo los distintos *marcos de referencia* de las actuaciones que se vienen llevando a cabo en materia de recursos hídricos y que son:

Los diferentes *Planes Hidrológicos de ámbito autonómico*: Planes Norte I y Norte II (aprobados por el Gobierno el 24 de julio de 1998); Plan Hidrológico del Louro (aprobado por el Gobierno el 24 de julio de 1998); Plan Hidrológico Galicia-Costa (aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia el 3 de mayo de 2001 y presentado al Consejo Nacional del Agua el 25 de julio de 2001).

*Plan de saneamiento de Galicia: (2000-2015)*: aprobado por el Consello de la Xunta el 9 de junio de 2000 y que contiene las actuaciones a desarrollar en materia de saneamiento y en el cual se plantea la dotación de infraestructuras a todo el territorio gallego.

*Plan de gestión de depuradoras de aguas residuales en la Comunidad Autónoma de Galicia*. En el cual se realiza un inventario, clasificación y estudio de las alternativas para el tratamiento y la eliminación de los lodos producidos en las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales de Galicia.

Es dentro de este marco de planificación donde se encuentran las *tres líneas de actuación* a las que se pretende destinar las inversiones en infraestructuras básicas en el periodo 2001-2010:

*Saneamiento y depuración de aguas residuales*: Con la finalidad de mejorar y recuperar la calidad de las aguas.

*Abastecimiento y regulación de los recursos hídricos*: Con el objetivo de conseguir una optimización, incremento y ahorro de los recursos.

*Defensa de inundaciones, mejora de márgenes y recuperación de entornos degradados*: Actuaciones dirigidas al restablecimiento de las condiciones naturales de los ríos y zonas costeras integrándolas en su entorno y protegiendo a la población de las posibles inundaciones.

Cada una de estas *líneas de actuación* persigue unos determinados *objetivos*, que serán alcanzados mediante la puesta en práctica del conjunto de *estrategias y acciones* propuestas en este plan, que se elabora con la finalidad de obtener un documento básico como marco de referencia para el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, tanto las de competencia autonómica como estatal. Se trata, por tanto de un documento estratégico que reúne e integra las directrices de actuaciones contempladas en los diferentes planes elaborados a día de hoy, con un horizonte temporal situado en el año 2010.

En cuanto a las *líneas estratégicas de actuación* en saneamiento y depuración de aguas residuales, previstas en el PDI, cabe mencionar que en Galicia la contaminación generada en toda la comunidad autónoma, debida a la población y las industrias conectadas a las redes de saneamiento, es la equivalente a la producida por una

población de 4.675.886 habitantes. Gracias al esfuerzo realizado en los últimos diez años, se consiguió multiplicar por cinco la población conectada a sistemas de depuración; en el futuro, con el desarrollo de este plan, está previsto que aumente un 30% más, alcanzando en el año 2010 una cobertura del 72% de la población equivalente. En esta línea, y para seguir cumpliendo los objetivos de la legislación comunitaria, es necesario mantener el ritmo inversor de los últimos años con objeto de financiar las actuaciones contempladas en este plan, que en materia de saneamiento y depuración van encaminadas a la consecución de estos tres objetivos:

*Mejora del tratamiento* (recogida, transporte y sistemas de depuración) de las aguas residuales.

*Control de la calidad* de las aguas.

*Gestión adecuada de los lodos y aguas tratadas.*

En el PDI de Galicia 2001-2010 se prevén realizar unas inversiones en saneamiento y depuración de aguas residuales por un total de 141.660 millones de pesetas que serán financiadas tanto por la Xunta de Galicia como por parte de la Administración del Estado y otras Administraciones, correspondiéndole a Galicia asumir 84.052 millones., esto es, el 59,33% de la inversión total.

## **7. CONCLUSIONES.**

Las decisiones adoptadas por la Comunidad Autónoma de Galicia en la Ley 8/2001 han de contemplarse como un *terminus a quo* y deben ser debidamente complementadas, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de desarrollar *instrumentos de ordenación del territorio* por parte de la Comunidad que establezcan un marco adecuado y racional de distribución de las actividades económicas en el espacio, todo ello sin olvidar las posibilidades que ofrece la utilización de la normativa, tanto estatal como autonómica, para la *protección de los espacios naturales*.

De una importancia nada desdeñable sería, asimismo, la procura del *desarrollo económico endógeno de las zonas del interior de Galicia* en cuanto pueda suponer la evitación de una desmesurada concentración de la población y de las actividades económicas en la franja costera de esta Comunidad. Es innegable que cualquier medida normativa, por muy apropiada que pudiese resultar, siempre posee efectos limitados y si el crecimiento poblacional e industrial en estas zonas se sigue produciendo la capacidad de respuesta será escasa.

La solución alumbrada por la CA de Galicia invita a una reflexión al respecto del *titular más idóneo para determinados servicios públicos y la necesidad de tener en cuenta el aspecto crematístico para decidir esta cuestión*. En primer lugar, no cabe duda que esta medida adoptada está lejos del objetivo de una segunda descentralización, más bien, por el contrario, parece reforzar la posición competencial de la Comunidad Autónoma frente a las entidades locales; no obstante, no cabe rechazar soluciones razonablemente adecuadas a los problemas planteados en base, exclusivamente, a su no correspondencia con apriorismos de carácter político. En segundo lugar, no parece descabellado afirmar que el respeto al principio de eficiencia obligaría a la hora de seleccionar la Administración prestadora de un servicio a utilizar no sólo criterios de eficacia y alto grado de consecución de los objetivos propuestos, sino también parámetros de economía en la gestión, máxime en momentos en los cuales la reducción del déficit público resulta decididamente vital. En definitiva, una adecuada planificación

a escala autonómica acerca de los recursos turísticos cuya protección sea más acuciante puede y debe llevar a un replanteamiento de la Administración prestadora de ciertos servicios públicos con la finalidad de garantizar el mantenimiento y mejora del actual *statu quo* en cuanto a las cuotas de mercado en el sector turístico.

Es preciso, también, reconocer la importancia de las competencias que los Municipios tienen sobre *urbanismo* y cuyo adecuado ejercicio, calificando el suelo y delimitando sus usos, puede sentar unas sólidas bases sobre las que se apoye cualquier ulterior política autonómica. Es conveniente en todo caso, dar un papel relevante en estos procedimientos a los municipios interesados e incluso a los grupos representativos de intereses sociales, conocedores como nadie de la riqueza que les rodea y de la necesidad de su mantenimiento.

Para finalizar, convendría señalar la necesidad de establecer adecuados *Sistemas de Información Medioambiental*, esto es, recursos tanto técnicos como humanos que permitan la captación, estructura, acceso y difusión de información y datos relativos a la situación medioambiental de ciertas zonas de la geografía gallega, en especial las que hayan sido valoradas como de especial interés para el turismo. Se establecerían así redes de control, muestreos, seguimientos y estudios que proporcionarían una información que posteriormente podría ser estructurada en herramientas de carácter informático como Bases de Datos y Sistemas de Información Geográfica. Con esta información podrían alcanzarse objetivos como mejorar la planificación y respuesta más inmediatas; identificación de necesidades de nueva normativa o mejora de la existente e identificar con mayor precisión y actualidad el estado de los recursos turísticos. Especial interés tendría la creación de un *Sistema de Información Geográfica* como herramienta de análisis de información que permitiría analizar las tendencias y determinar los factores que en ellas influyen así como evaluar las posibles consecuencias de las decisiones adoptadas en el ejercicio de la tarea planificadora pudiéndose fijar áreas de riesgo y localizar de forma óptima las infraestructuras necesarias.